



FOTO: CLAUDIO CORTÉS

Sergio Sáez Fuentes

La ministra de Energía, Ximena Rincón, encendió las alertas sobre el estado real del hidrógeno verde (H2V) en Chile, reconociendo que las dificultades estructurales amenazan con dejar una promesa de más de US\$71.000 millones en inversión solo en el papel.

"El hidrógeno verde es un elemento estratégico para el Estado y representan una oportunidad para Chile. Sin embargo, su desarrollo implica costos que lo hacen poco competitivo aún, por lo que el desafío es seguir avanzando en su desarrollo desde el punto de vista técnico", señaló Rincón. La ministra subrayó que el país no puede llegar tarde:

"Debemos estar preparados para los cambios que sean necesarios en el ámbito legislativo y de infraestructura, modificaciones o avanzadas según corresponda".

Y cerró con un mandato claro: "Seguiremos avanzando en el desarrollo del H2V para que cuando sea un combustible competitivo estemos listos y no nos alcance sin las respuestas operativas y legislativas acabadas o avanzadas".

Una cartera millonaria con pies de barro

Los datos de la consultora Tremaux grafican la magnitud del desafío. Siete iniciativas distribuidas entre Magallanes, Antofagasta y Valparaíso conforman el mapa actual de la industria. De los más de US\$71.000 millones comprometidos en papel, apenas US\$4.301 millones corresponden a proyectos efectivamente aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La proporción es elocuente: menos del 6% de la inversión declarada tiene luz verde para avanzar.

Entre los proyectos que superaron la

Millonarios proyectos en el limbo

Rincón toma bandera del hidrógeno verde y busca impulsar una industria estancada

La ministra reconoce altos costos, trabas regulatorias y falta de ejecución en una cartera por más de US\$71.000 millones, y plantea avanzar en cambios legales e infraestructura para destrabar los proyectos.

evaluación ambiental figuran la Planta e-Combustibles Cabo Negro, impulsada por HIF Global en Magallanes (US\$830 millones); el Proyecto Volta, en Antofagasta (US\$2.500 millones), la apuesta más ambiciosa de la región; y en menor escala, el H2 Verde Distrito Minero Calama (US\$441 millones) y la iniciativa de Hidrógeno Verde Bahía de Quintero (US\$30 millones).

Sin embargo, el lado más complejo del mapa lo ocupan los tres proyectos de mayor envergadura. H2 Magallanes, con US\$16.000 millones de inversión proyectada —el más grande de toda la cartera—, ingresó al SEIA en mayo de 2025 y no registra movimiento desde noviembre de ese mismo año. HNH Energy, también en Magallanes y con US\$11.000 millones en carpeta, permanece igualmente suspendido. Y el caso más crítico es el del proyecto INNA: con US\$10.000 millones proyec-

tados en Antofagasta, su titular —AES Andes— optó por desistir formalmente de la evaluación ambiental.

"No falta interés; falta capacidad para convertirlo en proyectos"

Para Claudio Ortega, socio director de Tremaux, el diagnóstico es directo: "En Chile no falta interés por el hidrógeno verde; lo que falta es capacidad para convertir ese interés en proyectos viables. Son inversiones de gran escala, en una industria todavía en consolidación, con exigencias altas de financiamiento, permisos y gestión territorial".

Ortega advierte que la solución no pasa únicamente por tener una hoja de ruta bien redactada. "Para que estos proyectos avancen, no basta con una estrategia país bien escrita. Se necesita un Estado más

coordinado, reglas más claras en la tramitación y una anticipación temprana de los riesgos ambientales y sociales. De lo contrario, seguiremos acumulando anuncios, pero no ejecución", indicó el consultor.

La dimensión de lo que está en juego se puede medir en el proyecto H2 Magallanes: un parque eólico de 5 GW con 616 aerogeneradores, siete centros de electrólisis capaces de producir 1.750 toneladas de hidrógeno al día, una planta desaladora y una planta de amoníaco con capacidad de exportar hasta 10.800 toneladas diarias. Todo conectado a un terminal marítimo para convertir a Magallanes en plataforma exportadora de energía limpia. Hoy, sin movimiento.

La industria pide señales claras

Desde el sector privado, Marcos Kulka, director ejecutivo de H2 Chile, valoró la posición de la ministra, pero planteó que el momento exige pasar de las palabras a los mecanismos concretos. "Valoramos las señales de la ministra Ximena Rincón, quien ha relevado el hidrógeno verde como un eje estratégico para la seguridad energética del país. Chile tiene condiciones únicas, con los mejores recursos renovables del mundo, por lo que avanzar en esta industria como política de Estado hace pleno sentido", afirmó Kulka.

El dirigente gremial subrayó que "hoy el foco está en reducir las fricciones para que los proyectos se concreten, agilizando permisos, avanzando en regulación habilitante y desarrollando infraestructura crítica como puertos, almacenamiento y logística". Kulka también destacó la importancia de la demanda interna —transporte pesado, minería, fertilizantes, acero— y el rol del proyecto de ley de incentivos tributarios para acelerar decisiones de inversión.

Como señal del compromiso sectorial, Kulka recordó que "una importante delegación chilena de más de 30 personas, incluida la ministra, asistirá al World Hydrogen Summit en Rotterdam, en mayo".

Cautela desde el Congreso

En el Parlamento, la mirada es más escéptica. El diputado Erich Grohs (PNL), integrante de la Comisión de Minería y Energía, llamó a la cautela: "Existen serias dudas sobre su eficiencia real y sobre si el potencial de desarrollo es tan extraordinariamente grande como se le ha intentado vender al país". Grohs advirtió que "financiar con recursos de todos los chilenos una industria que aún no prueba su rentabilidad sería un error", aunque reconoció que "se debe eliminar la burocracia que asfixia la inversión", para que, si la industria prospera, sea "por su propio mérito y competitividad".

El cuadro que se desprende de todos estos actores es el de una industria que Chile no puede darse el lujo de dejar escapar, pero que tampoco avanzará sola. La ministra Rincón lo sabe. La pregunta es si el sistema —regulatorio, legislativo, institucional— podrá moverse a la velocidad que los proyectos exigen.